

## SEÑORES DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS A CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA – PERÍODO 2019-2024

Carlos Rolando Yax Medrano, de veintitrés años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, de este domicilio y vecindad, me identifico con Documento Personal de Identificación con código único de identificación número dos mil novecientos noventa y cinco, cincuenta y dos mil novecientos sesenta y nueve, cero ciento uno (2995 52969 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, señalo como lugar para recibir notificaciones la trece calle, dos guion catorce, zona uno de la ciudad de Guatemala.

### EXPONGO

**OBJETO DE MI COMPARECENCIA:** Por este medio IMPUGNO la inclusión del abogado ROMEO MONTERROSA ORELLANA en la nómina que se trasladó al Congreso de la República de Guatemala para la elección de magistrados para integrar las Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, ya que cuando fue electo para figurar en dicha nómina, se desconocían los hechos y circunstancias que en el apartado correspondiente de esta impugnación se indican, mismos que hacen inidóneo al abogado Monterrosa para ser candidato a magistrado de alguna de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría.

### HECHOS

1. En el marco de la investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se pudo develar que el abogado ROMEO MONTERROSA ORRELLANA integrante de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, y candidato incluido en la nómina de abogados trasladada al congreso para elegir magistrados a integrar Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría, reconoció haber tenido contacto con Gustavo Alejos, esto luego de que la FECI anunciara públicamente intentos para amañar la elección de Cortes.
2. Monterrosa aseguró que recibió mensajes en su teléfono en donde le mencionaron los listados, los cuales borró de inmediato, aseguró. “Yo borré cualquier cosa en mi teléfono, no quiero clavos”, aseguró Monterrosa a elPeriódico. Monterrosa confirmó que conoce a Gustavo Alejos y que le pidieron apoyo para candidatos, a cambio de darle apoyo en la Comisión de Postulación para elegir magistrados de Salas de Apelaciones, donde forma parte de la nómina final tras ser apoyado por 25 comisionados. “Ya vio el apoyo que me dieron en Comisión de Postulación a mí”, dijo asegurando qué pasó “raspado” en la nómina que ya se envió al Congreso de la República. Además, dijo que otros comisionados fueron pero que no recuerda quiénes.

### ARGUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPUGNACIÓN

Entre los requerimientos exigidos por el artículo 113 constitucional, destaca la idoneidad. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, por idóneo debe entenderse “*adecuado y apropiado para algo*”. El Diccionario del Español Jurídico, de la Real Academia Española de la Lengua, indica respecto de esta palabra que es la: cualidad personal necesaria para la prestación de un servicio concreto o la asunción de un cargo. Una de las cualidades requeridas por la

Constitución para optar a un cargo público, como lo es la magistratura, que es la reconocida honorabilidad. Esta se exige, al tenor de lo dispuesto en el artículo 207 del texto magno que indica: los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. Para efectos de la presente objeción, se desarrollan algunas consideraciones argumentativas respecto de cada uno de los artículos citados. Respecto del artículo 113 la Corte de Constitucionalidad ha expresado: *"Debe tenerse en cuenta la previsión adicional que se introduce, respecto del derecho en cuestión, en comparación con el reconocido en el primer apartado del mismo artículo: «...y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez». No viene por tanto a configurarse el contenido del derecho como aplicable directamente a todos los guatemaltecos: no se trata, evidentemente, de que cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo, tenga derecho a acceder a cualquier cargo o función pública. La Constitución establece, entonces, un derecho de configuración legal. El legislador (y, en su caso, el reglamento) podrá restringir el ámbito de los cualificados para optar por una función o cargo público, estableciendo determinados requisitos, que excluirán desde el principio, a categorías de ciudadanos. Esta configuración legal, sin embargo, se ve limitada, por el artículo 4 constitucional, con una exigencia: que se mantenga el principio de igualdad. El legislador podrá, pues, establecer un conjunto de condiciones o requisitos, para poder ser candidato a las elecciones generales o locales, o para acceder a la función pública. Pero esas condiciones o requisitos habrán de ser enunciados de tal forma que no predeterminen el resultado del proceso de selección en favor de un candidato, discriminando desde el principio a quienes se encuentren en condiciones similares. El contenido del derecho reconocido en el artículo 113 de la Constitución establece la debida razonabilidad que debe existir en las limitantes, en aras del respeto del principio de igualdad, proclamado por el artículo 4 constitucional, pues a diferencia de éste, dicha norma no reconoce una igualdad entre todos los ciudadanos, sino entre aquéllos que cumplan los requisitos previstos por la ley, que se basen en razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez; será ésta la que fije las categorías de ciudadanos a quienes se abra el acceso a funciones o cargos públicos. Ahora bien, ello no supone que el legislador goce de una absoluta libertad de acción a la hora de determinar los requisitos en cuestión: éstos no han de ser discriminadores en sí mismos (por ejemplo, excluyendo a priori a personas de determinado sexo, raza o religión), ni podrán suponer vulneración de otros artículos constitucionales".* (Gaceta 87. Expediente 2336-2007. Fecha de sentencia: 19/02/2008). De tal manera que para acceder al cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones resulta necesario cumplir, no sólo con los requisitos previstos en el artículo 207 y el artículo 217 ambos del texto magno, sino que además, deben observarse, por virtud del principio de unidad de la Constitución las previsiones establecidas en el artículo 113 constitucional que regula los requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo o empleo público (sea electivo o no), los cuales, como lo señala el texto matriz, deben ser fundados en méritos de: a) capacidad; b) idoneidad y c) honradez. Esto no puede ser de otra manera porque la Constitución, como instrumento político y norma jurídica de aplicación efectiva, no admite que sus preceptos sean interpretados y aplicados aisladamente, pues debe propenderse a una intelección armónica de sus postulados para alcanzar, en plenitud, el ideal del Estado constitucional, democrático y social de derecho que configuro el poder constituyente. Dicho lo anterior, se concluye que las previsiones contenidas en el artículo 113 constitucional sí resultan aplicables a quienes optan, como postulados, al cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones, esto porque la Constitución tiende a efectivizar los valores y principios que la misma consagra, entre tales: el seguridad jurídica, el soberanía, la prevalencia del interés general sobre el particular y el autopreservación del orden constitucional, los cuales deben tomarse en cuenta por virtud de los principios de unidad, coherencia y fuerza integradora de esta. Ahora en lo que atañe al artículo 207 de la Constitución Política cabe resalta que: "[...] la

'reconocida honorabilidad' es un aspecto abstracto que sólo se puede comprender de una manera intelectual y que, ni en la práctica ni en las normas constitucionales indicadas, está definida la forma de comprobarla, ni mucho menos asignarle un valor. [...] la comprobación de la honorabilidad aludida en el auto citado, se lista en literales, así: A) Acreditaciones: 'la presentación de documentos o certificaciones'. B) Criterios sociales: 'la buena conducta profesional, la estima gremial, el reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros, siempre con el debido respeto al principio de presunción de inocencia'. C) Repercusiones en el actuar: 'tanto en lo profesional (si es que el candidato proviene del sector del ejercicio liberal), como en la judicatura u otro servicio prestado desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública; en el caso de mérito con la judicatura'. D) Respeto a la intimidad: 'De no ser así, se correría el peligro de entrar a aspectos de la intimidad personal o a la esfera del derecho a la propia imagen (derivado del contenido de los artículos 4 y 5 constitucionales), fuera de todo aquello que nutre la reconocida honorabilidad y lleve a juicios de valor ajenos, que se alejen de la previsión constitucional en lo que a este aspecto atañe'. E) Criterios de organismos internacionales: [...] la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, garantiza la inmunidad e independencia de los jueces, así como el acceso de toda persona a un 'juez o tribunal competente, independiente e imparcial'. F) Legislación ordinaria: [...] el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial establece como prohibiciones para los jueces y magistrados que integran dicho Organismo del Estado, el hecho de tener negocios o ejercer oficios que sean incompatibles con el decoro de su profesión. G) Criterios complementarios: [...] criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó esta Corte en el Expediente 2409-2009, Sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil nueve al considerar: 'debido a las especiales circunstancias que lo generaron y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el cómo del actuar público. Es atendiendo a esta razón que, precisamente, estos requisitos profesionales y éticos con los que debe cumplir cada aspirante, deben ser calificados con especial rigorismo, en atención a que una persona es honorable o no lo es y por ende lógicamente no existen categorías en cuanto a honorabilidad se refiere: —menos honorable, más honorable, o medio honorable [...]'." Gaceta 97. Expediente 942-2010. Fecha de sentencia 24/08/2010. Tanto el artículo 113 como el 207 constitucional son de obligatoria observancia para la elección de candidatos a Magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones y se debe acotar que ninguno de los dos se ha tomado en cuenta con relación al abogado Monterrosa Orellana. Lo anterior en tanto, como se dijo, ha expresado públicamente su vinculación en el caso que se instruye en contra de Gustavo Alejos por parte de la FECl.

Además de lo anterior, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el poder proviene del pueblo y, por ende, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas en la ley; es por ello que, de manera taxativa, el artículo 154 constitucional establece el principio de sujeción a la ley, por el que los funcionarios públicos están sujetos a la ley y jamás son superiores a ella. El principio de legalidad establece que las personas deben ser libres para hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la normatividad, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que está permitido por la ley. Esta noción es esencial para consolidar el estado constitucional democrático de derecho. Un organismo estatal que no se somete a la ley apresuradamente cae en el autoritarismo y la arbitrariedad. El principio de legalidad, implica en primer lugar; la supremacía de la Constitución y de la ley como expresión de la voluntad general frente a todos los poderse públicos. Además, el principio de legalidad implica la sujeción de la administración pública a sus propias normas. Todas las actuaciones de los poderes públicos deben estar legitimadas y previstas por la ley, de modo que la administración solo puede actuar allí



donde la ley le concede potestades. Es decir, el principio de legalidad implica que la ley es el único mecanismo de atribución de potestades a la administración.

Por último, la Corte de Constitucionalidad ha sido clara en su interpretación del artículo 154 constitucional: “[...] *tanto las funciones como las atribuciones de los órganos o los funcionarios públicos deben estar contempladas en las leyes y deben desempeñarse de conformidad con estas [...].*” Gaceta 117. Expediente 4617-2013. Fecha de sentencia: 28/09/2015. “[...] *la función pública, conforme el cual los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial y sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ello implica, como lo ha sostenido este Tribunal, que la función pública debe realizarse de acuerdo a un marco normativo, puesto que todo acto o comportamiento de la autoridad en cualquier ramo debe estar sustentado en una potestad que le confiera el ordenamiento jurídico vigente y, de ahí que si el funcionario público es depositario de la autoridad no puede hacer con esta potestad conferida sino lo que el ordenamiento jurídico le permite, entonces aquello que realice fuera de ese marco expreso de funciones y atribuciones o bien arrogándose las que la ley asigne a otro funcionario o entidad no puede sino configurarse como un acto arbitrario que necesariamente debe ser declarado inválido. [...].*” Gaceta 116. Expediente 2561-2014. Fecha de sentencia: 05/06/2015. “[...] *la función pública debe realizarse de acuerdo con un marco normativo, pues todo acto o comportamiento de la administración debe estar sustentado en una potestad conferida por el ordenamiento jurídico vigente. Si el funcionario público es el depositario de la autoridad y no puede hacer con ésta sino lo que el ordenamiento jurídico le permite, todo aquello que realice fuera de esta autorización normativa es un acto arbitrario, que deberá ser declarado inválido, sin perjuicio de la responsabilidad que genera al funcionario la realización de dicho acto [...].*” Gaceta 115. Expediente 2877-2014. Fecha de sentencia: 21/01/2015. La Comisión de Postulación debe sujetarse a la ley y a los postulados constitucionales aplicables, desarrollados en la presente impugnación.

Asimismo, debe considerarse que la Constitución Política de la República de Guatemala exige la idoneidad como un requisito esencial para optar a cargos como el de magistrado de Salas de la Corte de Apelaciones. Esto queda de manifiesto, si se toma en cuenta que deben concurrir en la persona del abogado de que se trate, la capacidad, la idoneidad, la honradez y la reconocida honorabilidad. No se puede considerar idóneo a un postulante que actúa, que se comporta, contrario a estos requisitos sine qua non para optar a una magistratura. En el caso objeto de la presente impugnación, el abogado Monterrosa Orellana ha dejado en claro que su proceder es contrario a las normas éticas que deben inspirar el desempeño personal y personal como profesional del Derecho. La reconocida honorabilidad es una condición sine qua non estatuida por la Constitución Política de la República de Guatemala. Así se menciona como requisito esencial para optar a diversos cargos públicos en los artículos 132, 207, 234 y 270 de la Carta Magna nacional. De la persona que actúa con honor se dice que es honorable, es decir que se trata de una persona digna de ser respetada o acatada. Se puede entender entonces la honorabilidad como la cualidad de la persona honorable. Este último vocablo significa digno de ser honrado o acatado. Se dice respecto de una persona cuando ésta procede con honradez, o sea que tiene rectitud de ánimo, integridad en el obrar (Diccionario de la Lengua, Real Academia Española, 22a edición). De lo dicho se desprende que, para ponderar si la cualidad relacionada puede atribuirse o no a alguien, resulta imperativo escrutar las acciones de esa persona, a efecto de determinar si la misma puede ser sujeto del calificativo de honorable. Atribuir la reconocida honorabilidad exige un proceso en el que sus pares reconozcan la condición a quien afirma ostentarla, tras un cuidadoso escrutinio de los actos que el postulante ha llevado a cabo en su vida. La honorabilidad no es innata deviene de los méritos propios. Si se revisa la actuación del abogado ROMEO MONTERROSA ORELLANA se puede establecer que la misma no se apega a los

parámetros constitucionales referidos lo que no lo hacen idóneo para ejercer la magistratura en alguna de las salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría.

### **POR TANTO**

El abogado ROMEO MONTERROSA ORELLANA, por todas las consideraciones vertidas NO ES PERSONA IDÓNEA para optar al cargo a Magistrado de ALGUNA DE LAS Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría porque ha faltado a las calidades requeridas por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, careciendo así de idoneidad por faltas a la ética y a la reconocida honorabilidad.

### **FUNDAMENTO DE DERECHO**

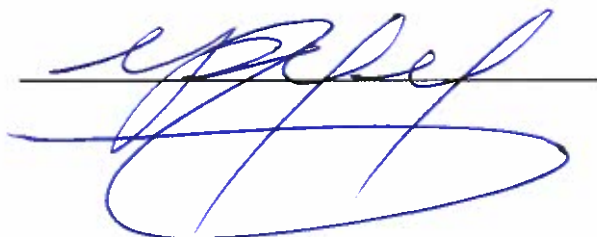
*Artículo 28. Impugnaciones. Las impugnaciones serán planteadas en un plazo de setenta y dos (72) horas después de la publicación de la nómina y resueltas por la Comisión de Postulación, en única instancia, en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas.*

En virtud de lo expuesto en el presente pronunciamiento y veto, a la Comisión de Postulación, respetuosamente,

### **SOLICITO**

Que se tenga por presentado mi IMPUGNACIÓN a la candidatura del postulante ROMEO MONTERROSA ORELLANA para el cargo de MAGISTRADO DE Sala de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría, con la finalidad de que sea excluido de la nómina que conocerá el Congreso de la República por carecer de idoneidad debido a su falta de reconocida honorabilidad.

Ciudad de Guatemala, 20 de septiembre de 2020.



<b>REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA</b> <b>Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación-DPI-</b>		
<b>CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN</b> -CUI- <b>2995 52960 0101</b>	<b>NOMBRE:</b> <b>CARLOS</b> <b>ROLANDO</b> <b>APILADO:</b> <b>YAX</b> <b>MEDRANO</b> <b>NACIONALIDAD:</b> <b>GTM</b> <b>SEXO:</b> <b>MASCULINO</b> <b>FECHA DE NACIMIENTO:</b> <b>18FEB1997</b>	
		 
		<b>15NOV2016</b>

LUGAR DE NACIMIENTO:  
GUATEMALA  
GUATEMALA

E-1126 F:193 P:2026

VIEDAD  
MEXICO  
GUATEMALA

ESTADO CIVIL  
**SOLTERO**

FECHA DE VENCIMIENTO:  
**14NOV2026**

NÚMERO DE SERIE:

**0000018844769**

IDGTM29955296920101S0101<<<188  
9702189M26111147GTM<<9090155645  
YAX<<CARLOS<<<<<<<<<<<<<<<<<